



Universidad Diego Portales.

Facultad de Ciencias Sociales e Historia.

Sociología.

Sectores Populares y Política.

Subjetividad política, politización y acción colectiva en los sectores populares de 1990 a 2014 en Santiago de Chile.

Nombre: Camila Muci Ovalle.

Profesores: Nicolás Angelcos.

Evelyn Arriagada.

Fecha: 30 de Enero del 2015.

Índice

I. **¿Quiénes son los pobladores?**

A. Los antiguos pobladores en los nuevos pobladores: diferencias y semejanzas.

A.1-. El universo poblacional: Cambios estructurales y subjetivos en los nuevos pobladores.

A.2-. El movimiento de pobladores.

B. Las pobladoras: El género presente.

C. Los nuevos pobladores: identidad y contexto.

D. Situación habitacional.

II. **Las nuevas acciones colectivas: Resistencia al sistema.**

A. Institucionalidad: autonomía y articulación.

B. Horizontalidad como eje fundamental.

C. Finalidades de las acciones colectivas: ¿Una mejor vida?

D. La continuidad con el histórico 'movimiento de pobladores'.

E. La lucha por la vivienda.

III. **Nuevas concepciones de la política.**

A. El cambio de gobierno con la llegada a la democracia: política de financiamiento.

B. La política de vida: nociones de la política popular.

C. Las acciones colectivas como prácticas políticas.

I-. ¿Quiénes son los pobladores?

A-. Los antiguos pobladores en los nuevos pobladores: diferencias y semejanzas.

A.1-. El universo poblacional: Cambios estructurales y subjetivos en los nuevos pobladores.

La identidad de los antiguos pobladores y los nuevos que se adscriben después de la llegada a la democracia en Chile, constituye un importante componente dentro del universo poblacional el cual ha cambiado en el desarrollo de reivindicaciones y objetivos de su lucha popular. Este cambio estaría modificando las bases estructurales sobre las cuales se ha desarrollado hasta ahora el modelo cultural de la sociedad industrial (Sandoval, 1999: 2) como la aspiración por una mejor vida, un lugar en la sociedad y ciudad, que ha sido históricamente una reivindicación de la base del movimiento de pobladores (Márquez, 2008: 347). Estas nuevas interpretaciones estructurales del modelo cultural que con los años ha ido cambiando al universo poblacional del Chile post-dictatorial -específicamente la década del 90'- que constituyen una nueva ideología de las conductas humanas, es decir, unas nuevas concepciones de lo bueno, lo justo, lo verdadero, etc.

Dicho lo anterior, los relatos de los pobladores en el siglo XXI dan cuenta, según Francisca Márquez (2008), de dos elementos distintivos de lo que fueron estos viejos actores populares de mediados del siglo XX en los cuales se entrecruza una aspiración a igualdad, solidaridad y equidad, que junto con Sandoval (1999) dejan entrever diferentes aristas en lo que se han reconstruidos los pobladores. La primera es la identidad fragmentada que se construye frente a la pérdida de los viejos referentes de identidad que constituían la clase obrera y los relatos de las luchas poblacionales. De acuerdo a Márquez (2008), los actores poblacionales no solo están ausentes del escenario y del debate público, sino que también enfrentan dificultades para definir principios que les otorguen identidad y sentidos que unifiquen sus acciones. Así, no siempre se resiste esta fragmentación, sino que se quiebran y generan vacíos de identidades en el discurso que interpelan. Este cambio se da en contextos de fuerte segregación y desigualdad, lo que hace que pierdan unidad, fuerza e imposición frente al poder y el Estado que domina su invisible presencia en la ciudad: lo que hoy está en juego es la capacidad de historicidad de estas identidades poblacionales (Márquez, 2008: 349). Esto claramente puede darse cuenta, a través del campo sociocultural que aborda Sandoval (1999) en cuanto a la tendencia de repliegue personal hacia dentro de la propia casa –una vez ya obtenida-, individualizando las vidas de los pobladores, las cuales antes compartían y luchaban como una sola. La lucha por una vivienda social se teje en tramas que tienden hacia la interioridad (Besoain & Cornejo, 2014: 11) la cual revela la centralidad de un esfuerzo y sacrificio individual, afectado a un espacio muy privado, cercano al orden de la supervivencia. Lo anterior, según Besoain &

Cornejo (2014) configura una ética del mérito y del esfuerzo individual en un escenario valorativo por la llegada a la vivienda social que significa un triunfo personal. La vivienda inaugura un límite (...) dando al 'yo' una particular arena donde hacer aparición (...) se instala la dupla adentro/afuera como eje sobre el que se construye la subjetivación (Besoain & Cornejo, 2014: 14) en donde el miedo toma el territorio que exceda los límites del espacio interior –el afuera- y frente a ellos, se responde con más repliegue, con la resignación de quien sabe que el futuro no está en sus manos y solo queda disfrutar de lo único de lo que se siente soberano: el presente de su espacio privado (Besoain & Cornejo, 2014: 15).

La segunda, es la acción fragmentada, en la que existe una precariedad de los referentes colectivos, y los impedimentos que obstaculizan la construcción de acción colectiva, dando cuenta de un desapego de los vínculos y hábitos que contenían y a la vez protegían el mundo poblacional. La vieja lucha por el derecho a un lugar en la ciudad se ha transformado progresivamente en la lucha interna por un lugar en los estrechos márgenes del propio gueto (Márquez, 2008: 350). Esta tendencia expresiva (Sandoval, 1999: 10) no se concreta ni se materializa en un rol de actor social constitutivo de movimiento, sino que se da en mil fragmentos y acciones diferentes en tanto adultos como jóvenes, lo que da en una lógica del repliegue de aislamiento, de encierro. Claramente, estos indicios no son compartidos por todos los pobladores a fines de la década de los 90', pero busca construir tendencias que con el cambio económico y social, se fueron dando al paso de los gobiernos de la Concertación en Chile. Sin embargo, aun cuando haya un repliegue en cuanto al aislamiento de los pobladores, la integración y el reconocimiento que se escuchan en sus discursos, aun cuando estén mucho mejor en las viviendas sociales que en los campamentos en cuanto a servicios básicos, todos ellos se sienten excluidos, habitantes de los bordes de la ciudad. Mejor alimentados y con techo, los nuevos pobres de este país aún ocupan el patio trasero de nuestra democracia (Márquez, 2008: 351).

Todas las poblaciones tienen un origen, pero no todas tienen una identidad, un discurso del cual se amarren a un objetivo continuo y que lo haga un proyecto a futuro. La identidad no es sólo narración, sino también capacidad de acción y movilización (Márquez, 2008: 366), en donde la territorialidad, el 'poder de habitar' (Garcés, 2002), otorga un fundamento al sentimiento de pertenencia de los espacios urbanos y simbólicos de las poblaciones. Para construir identidad poblacional, es necesario tener control sobre las propias decisiones, de modo que aquellas se expresen en prácticas concretas, en toma de decisiones, en un poder simbólico y práctico que demuestre el carácter permanente del barrio (Márquez, 2008: 367).

A.2-. El movimiento de pobladores.

En donde se enmarcan estos nuevos pobladores en cuanto al quiebre de su identidad y acción, no es simplemente en un aislamiento de la tendencia expresiva, como decía

Sandoval (1999), ni en el de ausencia por el no reconocimiento de sus peticiones que constituían una pérdida de todo por lo que se luchaba, como daba cuenta Márquez (2008). Estos nuevos movimientos sociales urbanos, tienen una redefinición de sus formas de organización y de acción, de autogestión como eje central, de nuevas técnicas de lucha que muestran una territorialidad conflictiva urbana en las periferias de la ciudad (Renna, 2010: 9) lo que también reconfigura su identidad como nuevos pobladores, y que no se enmarcan y se resignan a su suerte de pobres, sin articular movimientos sociales de rechazo como da cuenta Sandoval (1999). No hay una ausencia de proyectos, ni un abandono histórico, no son sujetos que solo aparecerán en cuanto 'damnificados' o 'beneficiarios de proyectos' (Sandoval, 1999:22) y aun cuando sean objetos de políticas sociales de la estructura de modelo del sistema, hay concepciones por las cuales aún luchar. Antes se trataba de los 'sin casa', personas pobres de origen proletario, integrantes de los sectores populares, los que hoy se movilizan lo hacen más en función de su identidad como pobladores plenos, como propietarios inmobiliarios, que como pobres o desheredados (Sabatini & Wormald, 2004: 79).

El antes y el después de los pobladores, constituidos por los cambios políticos que ha sufrido Chile desde la dictadura militar, constituye una fragmentación de la identidad de 'ser poblador'. Aun cuando hay continuidades en diferentes movimientos, como el de Inmuebles Recuperados por Autogestión (IRA), en las demandas instrumentales (demanda por vivienda) respecto al tradicional movimiento de pobladores, pero claramente están cargados de una fuerte ruptura, principalmente hacia los referentes políticos tradicionales a los cuales subordinaban su destino (Angelcos, 2013: 5): el movimiento propone como sujeto de este cambio al Nuevo Poblador. La dificultad radica en que este no es alguien concreto, alguien del cual uno puede registrar su existencia como obrero o el mismo poblador (...) el Nuevo Poblador es el Inexistente (...) es aquel cuya existencia política tiene el menor grado de aparición en el mundo existente *tal cual* es; por lo mismo, aquel cuya existencia integral depende de la transformación del mundo y sus condiciones de posibilidad (Angelcos, 2013: 5).

Los nuevos movimientos sociales urbanos cohabitan con los movimientos sociales tradicionales. Si bien esta convivencia permite ver la presencia de conflictos ligados al proletariado (con el movimiento obrero expresado) y también aún se observan acciones reivindicativas en los bordes de miseria de las ciudades (con bases populares), la opción creciente en este contexto son estos nuevos actores (movimientos sociales urbanos) que se despliegan contra las viejas y nuevas prácticas de explotación, cruzando toda la ciudad, e involucrando parte importante de las clases sociales (Renna, 2010:9)

B-. Las pobladoras: El género presente.

Con respecto a la mujer como pobladora en Chile, no hay demasiados indicios que comprendan el protagonismo y la transformación que promueva a la mujer de la esfera

privada a la pública. De igual manera, en las tomas de terreno producidas por los movimientos de pobladores en diferentes expresiones, hay un reconocimiento y valorización del rol de la mujer. Estas son consideradas como el motor del proceso de la acción colectiva y capacidad organizativa que fundamenta la autoafirmación como sujeto: ‘La práctica colectiva que se dio en estos espacios, las hizo descubrir, desarrollar y valorar su capacidad organizativa y constituyó un aporte fundamental en su autoafirmación tanto individual como colectiva. La incorporación de la mujer a la organización social, además de permitirle salir del mundo privado del hogar, la obliga a asumir un rol en el quehacer público y adquirir un sentido de pertenencia a un colectivo mayor’ (Figuroa, 2003: 571). Sin embargo, aun cuando salga de la esfera privada a la pública, las tareas designadas tienen un carácter hogareño (cocinar, limpiar, etc.) por lo que su relevancia como sujeto de iguales capacidades que los hombres, no ha sido del todo enunciada y se ha mantenido un rol patriarcal: ‘La importancia y el rol que juega la mujer durante el proceso participativo de construcción social desde la constitución de la población Villa Francia, hasta la actualidad, viviendo su proceso natural de vida; fecundación, parición, crianza y educación de los hijos, sin abandonar los procesos participativos que se dieron y se dan en la base social de la población’ (Contreras e Ibarra, 2005: 187).

Cabe destacar que en materia empírica y en recopilación bibliográfica, el género no ha estado muy presente en los diferentes trabajos que apuntan a los movimientos de pobladores y acciones colectivas. El protagonismo de la mujer aún no ha llevado al estudio de este como sujeto y como pobladoras que pueden con coraje y esfuerzo fortalecer la lucha de las que han sido protagonistas los hombres.

C-. Los nuevos pobladores: Identidad y contexto.

Como ya dimos cuenta, los cambios en las raíces culturales, económicas, políticas y sociales contribuyeron a diferentes formas de reivindicación y reconocimiento de ser poblador. Estos se diferencian de los movimientos de los años sesenta, setenta y ochenta por tres razones: la fragmentación de la identidad del poblador, la aspiración a la igualdad y la acción fragmentada (Mathivet & Pulgar, 2014: 1).

Esta fragmentación de la identidad, como dimos cuenta con Márquez (2008), se dio básicamente por una instalación del modelo económico, social y cultural neoliberal después de la dictadura militar en Chile (1973-1990). Lo anterior principalmente ocurrió por el giro estructural que consideró el suelo como un recurso no escaso, lo que abrió paso a la especulación inmobiliaria dominante en la construcción de viviendas. Este marco político funciona a través del financiamiento de la vivienda social, cuyo objetivo es resolver los problemas de la marginalidad habitacional, basado en el ‘subsidio habitacional’. Para Rodríguez & Sungranyes (2005), este sistema de subsidio habitacional protege tanto los intereses de las empresas constructoras como los del mercado financiero. Este cambio económico de la vivienda la considera solo como una mercancía y su acceso como una

decisión calculada de parte de los postulantes a partir de sus ingresos. Junto con esto, la tendencia expresiva y de repliegue personal (Sandoval, 1999: 10) permite reconocer el proceso de individualización y la marginalización del territorio. Estas políticas lo único que hicieron, fue convertir a los pobres -marginados, vulnerables, excluidos- en simples beneficiarios los cuales son asistidos por programas sociales, por lo cual en vez de tener el papel histórico de los pobladores como constructores de ciudad, su participación e identidad se vio renegada a beneficiarios y no como sujetos de lucha productiva, logrando cambiar así la lógica de asistidos y mutando las prácticas, redistribuyendo la plusvalía, ejerciendo ciudadanía desde los territorios (Mathivet & Pulgar, 2014: 2).

Pese a lo anterior, la situación de los nuevos pobladores y sus nuevos movimientos o dinámicas, reproducen la asociación horizontal auto-gestionada, siendo el desafío mayor valorar sus propias experiencias como prácticas de transformación social y, a partir de ellas, encontrar los modos de articulación que les permitan constituirse en sujetos colectivos de cambio y democratización de la sociedad (Garcés, 2004: 31). Claramente hay una motivación a participar y accionar la defensa de la calidad de vida, justicia y equidad (Sabatini & Wormald, 2004: 79), en donde los tiempos distintos, llevan formas de demandas, alianzas y luchas diferentes a las cuales eran comprendidas por los antiguos pobladores.

La reconfiguración de su identidad y del entorno en el cual se desarrolla en nuevo poblador, da un giro al panorama del habitante de la ciudad y a los objetivos por los que luchan. Sin embargo, son actores protagonistas en cuanto a su producción social de hábitat, buscando un derecho a la ciudad, el reconocimiento, la equidad, entre otras cosas.

Un cambio en cuanto a fragmentación de acción e identidad, visto desde otro punto de vista es en el ingreso o participación al ANDHA Chile: la identidad previa al ingreso en la agrupación que caracteriza a sus participantes es la de ser poblador- propietario, y tras la aproximación a este conflicto y la ejecución de acciones colectivas por el miedo de perder las vivienda, se produce una ruptura respecto de las rutinas y los sentidos que daban pie a dicha identidad, y pasan a autodefinirse como deudores habitacionales, pues la categoría poblador ya no alcanza a dar cuenta de la realidad que ellos experimentan, ahora se sitúan bajo una nueva categoría de pertenencia (Aravena, 2011: 56). Lo anterior claramente refleja la conformación de un 'nosotros' que comparten ideales y es totalmente significativo para los sujetos, diferenciándose totalmente de los que aún se consideran pobladores. Así, genera un cambio tanto cognitivo como emocional frente al modo en que se habían entendido la problemática de endeudamiento, el cual previamente había sido aceptado como 'normal', ahora es significado como una expresión de una inequidad social que comienza a caracterizar a estos nuevos pobladores del conflicto colectivo, los cuales tras tomar conciencia, contribuyen en varias acciones o actividades colectivas.

La identidad del poblador, puede ser explicada por dos componentes: por una parte, la identidad que precede a involucrarse en las acciones colectivas y la que se construye tras enfrentarse al conflicto. La identidad previa, es la de poblador-propietario y la de después, genera una ruptura respecto de las rutinas y los sentidos que daban pie a dicha identidad y se comienzan a autodefinir como deudores habitacionales en un claro 'nosotros' de asociatividad colectiva.

D-. La situación habitacional y conflicto urbano.

Las políticas sociales de financiamiento a la vivienda han estado asociadas durante mucho tiempo a la superación de la pobreza. Sin embargo, son acciones que otorgan una solución habitacional, es decir, que resuelve aquello que abordan específicamente: el problema de la vivienda, sin que necesariamente produzcan un efecto positivo en la pobreza, en donde pueden llegar incluso a ser negativo (Fernández, 2008: 119). Según María José Castillo (2010), los pobres ocupan espontáneamente las 'tierras de nadie' o arriendan terrenos para construir sus viviendas en condiciones muy precarias. Los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia que rigen desde 1990 en adelante en Chile, mantienen una política creada por el régimen militar orientada básicamente al financiamiento, proporcionando viviendas a las familias de allegados y evitando la toma de terrenos, por lo que el suelo adquiere un mayor valor con la consecuente expulsión hacia los bordes de los habitantes originales, características que se mantienen hasta hoy, segregando la ciudad de Santiago de Chile. Esta política de financiamiento solo crea un beneficio habitacional pero que sin embargo también genera un problema cualitativo en los pobladores. Este programa de vivienda progresiva en dos etapas, depende de la permanente voluntad de los habitantes por mejorar día a día el medio en el que viven (Castillo, 2010: 52).

Esta política de financiamiento creada a partir del déficit habitacional y de las varias tomas progresivas de suelos de gran envergadura, genera una situación habitacional claramente particular. Si antes el problema era el 'poblador-sin techo', el cual vivía en campamentos precarios alejado del centro de la ciudad, en sitios de toma y de poca urbanización, hoy ha cambiado al poblador 'con techo' o las familias 'con techo'. Lo anterior se da cuenta en el trascurso de los años de la política en los años '90, en donde el colapso del modelo de gestión promovido por el Estado por la escasez de suelo en el interior de la ciudad es paralelo al problema de la mala calidad de los nuevos productos de la política de financiamiento, el que termino por crear un nuevo problema de vivienda y urbano: el de las familias 'con techo'.

Las nuevas familias 'con techo' que han accedido a una vivienda social financiada por el Estado, enfrentan una serie de obstáculos que afectan su calidad de vida. De acuerdo a una encuesta realizada por Rodríguez & Sungranyes (2004) el 64,5% de estas familias quieren abandonar su actual vivienda. Los motivos de esto prevalecen en las razones de convivencia entre los vecinos, percepción de seguridad, presencia de delincuencia y droga.

Los efectos urbanos de la políticas habitacionales en Chile, crearon nuevos problemas para las familias, la sociedad y el Estado, y antes de construir más viviendas, deberían orientarse a recuperar y mejorar el inventario de viviendas existentes (Rodríguez & Sungranyes, 2004).

Así como se han ampliado las formas de dominio y explotación en la periferia del sistema-mundo, las luchas o conflictos urbanos de los nuevos movimientos sociales adquieren un carácter plural que supera la reivindicación por la vivienda o por un lugar en la ciudad y se amplía hacia nuevos ejes de lucha. Son luchas por la vivienda y por la ciudad, por su valor de cambio y también, muchas veces más importante, por su valor de uso (Renna, 2010: 8). En Chile, el mapa de conflictos urbanos, el 48% corresponde a conflictos por crecimiento urbano (expropiaciones, construcción en altura), un 23% de conflictos de vivienda (allegados, deudores, deterioro de la vivienda y tomas de terreno), un 19% que remite a impactos medioambientales y un 10% por el deterioro barrial (destrucción de patrimonio histórico o recuperación y ocupación de espacios públicos) (Renna 2010: 9, Notas Digitales, 2009).

Las luchas cambian a ser ‘por’ la ciudad, entre la oposición de una ciudad pensada para la reproducción del patrón de poder en América y la otra ciudad levantada por pobladores, jóvenes, indígenas, mujeres y otros sujetos sociales (Renna, 2010: 9).

Actualmente el programa Quiero mi Barrio reconoce la necesidad de una intervención multisectorial en los lugares más vulnerables, dando cuenta de un trabajo simultáneo en el ámbito del desarrollo urbano y social. Estos barrios de la Región Metropolitana son elegidos discrecionalmente por las autoridades, sin dar cuenta de la envergadura de los proyectos que es necesario ejecutar. Este programa surge como una respuesta intersectorial con pretensiones de integralidad frente a este desafío de segregación, pero sin embargo, tienen que ver más con la entrega de vivienda y equipamiento urbano que con la superación de la pobreza y la integración social urbana (Fernández, 2008: 120).

Hoy las viviendas sociales se constituyen como un factor de conflicto por la segregación, allegados de poblaciones pericentrales que son desplazados por el mercado, millones de familias adeudadas con la banca privada, arrendatarios desalojados, depredación de paños verdes por la expansión metropolitana de las ciudades, tanto en zonas centrales como en las periféricas (Renna, 2010:9). Dentro de estas viviendas sociales, se construye un terreno fértil para el surgimiento de nuevos y más complejos problemas sociales, generando un cambio subjetivo que intensifica el cambio en el universo poblacional.

II-. Las nuevas acciones colectivas: Resistencia al sistema.

A-. Institucionalidad: Autonomía y articulación.

Las nuevas acciones colectivas que despliegan una resistencia al status quo dentro de las luchas que, de una y otra forma, no se ajustan a los canales provistos por la institucionalidad, repliegan una nueva forma de expresión en su relación política con el Estado. Según Renna (2010) hay tres formas en que se pueden enmarcar los movimientos: los que buscan influenciar y presionar para desde ahí modificar las condiciones de la vida de la sociedad (sindicatos y gremios), los que tienen una confrontación abierta y frontal, como contrapeso directo (frentes armados y experiencias autonómicas) y los que esquivan al estado con oposiciones laterales desestructurando desde abajo, carcomiendo desde la frontera las bases y límites del sistema hegemónico. (Renna, 2010: 4). Es en esta última opción en que se encuentran los nuevos movimientos sociales, naciendo desde los bordes culturales, etarios, raciales, económicos, étnicos y/o sexuales, que no se adhieren abiertamente a la negociación y desde lo social entran en luchas políticas transformando con sus acciones las relaciones de poder.

El proceso de subversión popular en Chile no se llegó a constituir como una opción de sociedad frente al proyecto que comandaba la dictadura. En los años noventa, con la instauración definitiva del neoliberalismo y la crisis de las organizaciones de izquierda, se develó una presencia de nuevos actores sociales urbanos, diferentes al obrero (Renna, 2010: 5). Así, las organizaciones que habían sido actores importantes en la resistencia a la dictadura, vivieron un repliegue por los términos de derrotas militares y políticas, inserción de dirigentes en la nueva institucionalidad y el cansancio provocado por la acción política sistemática desarrollada en la década anterior (Garcés, 2004).

La institucionalidad política está en una relación de complementariedad abierta y complicidad con el mercado y grupos económicos, reproduciendo las desigualdades y pobreza generadas. El Estado ya no es concebido como una entidad que defiende y le da al pueblo con respecto a sus necesidades, sino como una fuerza política con intereses propios que actúa a base del poder fáctico económico, que es parte de estas injusticias y sigue siendo gravitante en la reproducción del modelo neoliberal. El mayor nivel de autonomía existe, según Godoy y Matus (2011) en aquellas organizaciones que forman parte de un proyecto socio-político y los mecanismos de articulación que desarrollan las organizaciones sociales son principalmente producto de la relación que establecen en su micro-espacio con otras organizaciones sociales y son de carácter incipiente (Godoy y Matus, 2011: 20). La articulación social en el caso de las organizaciones sociales con una mirada al movimiento

social, van en la búsqueda de una mayor libertad en el accionar de sus propuestas de trabajo, por lo que expanden redes más fuertes que permiten desarrollar un sólido movimiento, autónomo e independiente de poderes facticos del Estado para generar así una propia representación política de la democracia esperada.

En la actualidad, Renna (2010) afirma que los movimientos sociales urbanos muestran tres elementos que permiten dar cuenta de la autogestión: 1) tienen una cierta condición de autonomía en la acción que reivindica la confrontación directa hacia el Estado para producir el hábitat en que se levantan ellos mismos, 2) el carácter plural de sus acciones dan cuenta de la superación del reclamo vivandista y apuntan a proyectos socio-políticos más amplios y 3) la territorialización múltiple en donde no hay solo un lugar en conflicto, sino que las ciudades están en su totalidad en conflicto (Renna, 2010: 6). Según Garcés (2004), estas dan paso a dinámicas de asociación horizontales, auto-gestionadas y aun cuando el contexto general no los ha favorecido, representa el potencial democratizador popular de la sociedad chilena. Estas nuevas orientaciones, grupos o movimientos están dadas por foros ciudadanos, redes temáticas o sectoriales de mujeres, asociaciones de identidad sexual, resistencia indígena, entre otras, que se articulan en la estructura cultural del universo poblacional y que da paso al movimiento popular o acción colectiva.

Sin embargo, a veinte años de la democracia, los espacios democráticos de la sociedad no han incluido ni consolidado a la sociedad civil organizada ni al universo poblacional, generando una desvinculación con las instituciones. Para Godoy & Matus (2011) la autonomía y la articulación social de las organizaciones colectivas son fundamentales para dar cuenta del cambio y transformación de la sociedad y poder generar un frente a causa del modelo neoliberal, en donde el poder popular y la lucha por una reivindicación de los ciudadanos ha generado herramientas fuera de la estructura institucional chilena.

B-. Horizontalidad como eje fundamental.

Los pobladores que se organizan en un movimiento o una lucha social, tienden a tener una particularidad de institucionalidad dentro del grupo, en donde la horizontalidad es una propuesta clara. Esta horizontalidad es una práctica o propuesta que desarrolla el poder de la decisión en la participación igualitaria de los individuos que la conforman, buscando una interacción claramente mayor en la democracia practicada por el Estado.

La horizontalidad del movimiento se plantea desde una articulación y autonomía de mayor libertad en el accionar de sus propuestas de trabajo desde una emancipación social que permite la independencia y también la posibilidad de superar diferencias de la comunidad. Esta articulación y propuesta de autonomía, da cuenta que en el micro-espacio se consolidan las relaciones a través de esta horizontalidad. La capacidad de innovar su accionar para incluir perspectivas comunales en sus objetivos, reconstruye la identidad y

cohesión social propia de las organizaciones sociales las cuales cumplen un rol único en la sociedad en cuanto a generar un espacio de igualdad entre los miembros de una sociedad.

Las organizaciones sociales analizadas por Godoy & Matus (2011) se centran en reconocer la complejidad que involucra el movimiento en el tiempo actual en donde destacan las posibilidades que subyacen en las prácticas cotidianas subjetivas. Según el análisis que realizan, dan cuenta que el nivel mayor de autonomía existe en aquellas organizaciones que forman parte de un proyecto socio-político y que los mecanismos de articulación que desarrollan las organizaciones sociales son principalmente producto de la relación que establecen en su micro-espacio con otras organizaciones sociales, de carácter incipiente.

Estas líneas de acción evidencia el protagonismo del escenario político, en donde la estrategia es la movilización, lucha, autogestión, entre otras. Según Mario Garcés (2004) “la existencia de la paradoja de la transición chilena a la democracia, ésta descansa, principalmente, en los consensos y negociaciones alcanzadas, y le da la espalda al movimiento ciudadano que la impulsó y le dio legitimidad” (Garcés & Valdés; op cit: 25). De acuerdo a esto, Boaventura De Sousa (2001) da cuenta que se refuerza una idea de obligación política horizontal entre los ciudadanos, una solidaridad concreta en la formulación de la voluntad general en la formulación de una nueva cultura política, nueva calidad de vida personal y colectiva basada en la descentralización, cooperativismo y democracia participativa.

En síntesis, las acciones analizadas por Godoy & Matus (2011) que han emergido en Santiago son variadas, desde el discurso político hasta lo vecinal-cultural. Los procesos internos de cada organización social son diferentes, pero siempre hay una consolidación en la puesta en marcha de la acción a realizar, ya que los proyectos concretos por los que luchan elevan los grados de autogestión y articulación horizontal en que todos participan.

C-. Finalidades de las acciones colectivas: ¿Una mejor vida?

La mayoría de las acciones colectivas de los movimientos y organizaciones sociales tienen por objetivo una mejor vida. Este –necesario- objetivo plantea una lucha contra el sistema que los excluye políticamente y una calidad de los recursos materiales que los rodean. Esta mejor vida involucra a justicia social, igualdad, bienestar en ámbitos de salud, educación, medio ambiente y vivienda.

Godoy & Matus (2011) afirman que las organizaciones sociales, que participaron en el estudio de su tesis –‘Autonomía y articulación social de las nuevas organizaciones sociales de la ciudad de Santiago’-, coinciden en la búsqueda de espacios para la participación social que genere mejoras en su calidad de vida. Si bien la ciudad ha sufrido grandes cambios en su estructura, evidenciando altos niveles de fragmentación y exclusión social que han impactado a las personas en su calidad de vida y a las organizaciones sociales en su

quehacer, aún persisten organizaciones sociales que trabajan en pro de sus derechos (Godoy & Matus, 2011: 132). Sabatini & Wormald (2004) dan cuenta que la instalación y puesta en marcha del relleno sanitario de Santiago Poniente constituyó una lucha por el territorio que tenían como principal objetivo la calidad de vida. De los entrevistados que son participantes del movimiento Consejo de Defensa del Medio Ambiente, coinciden en señalar a la ‘defensa de la calidad de vida’ como la motivación principal de su acción: ‘Nosotros nos movilizamos y creamos el Consejo de Defensa del Medio Ambiente para ayudar a impulsar una política ambiental en la comuna, para mejorar nuestra calidad de vida como habitantes de la comuna y hacer que las autoridades se hagan responsable del tema’ (Ernesto, cabeza del movimiento de vecinos de Maipú) (Sabatini & Wormald, 2004: 78).

El cambio de poblador es claramente significativo, si el sujeto popular tenía una definición social o clasista en la década del ’60, actualmente va trastocándose parcialmente en una identidad territorial. Ya no es el pobre desheredado el que lucha por una vivienda y un lugar en la ciudad, en definitiva, por su carta de ciudadanía, sino que se trata del ‘maipucino’ que lucha porque no lo vuelvan más pobre y por su derecho a una ciudad mejor, a una más elevada calidad de vida (Sabatini & Wormald, 2004: 79). Una mejor vida o calidad de vida, no es solo entendida como la superación de la pobreza material de quienes la habitan, sino una transformación de la sociedad de la cual son partícipes, buscando un espacio democrático e incluyente que permita mejorar diferentes aspectos de la vida. ‘La idea de la obligación política horizontal entre ciudadanos y la idea de la participación y de la solidaridad concretas en la formulación de la voluntad general, son las únicas susceptibles de fundar una nueva cultura política y, en última instancia, una nueva calidad de vida personal y colectiva basadas en la autonomía y en el autogobierno, en la descentralización y en la democracia participativa, en el cooperativismo y en la producción socialmente útil’ (De Sousa, 2001: 181).

Un aspecto interesante es la variación y especificidad de género en las motivaciones que tienen los vecinos de Maipú las cuales le dan un giro práctico al concepto de calidad de vida, vinculándolo preferentemente a la salud, cosa que los hombres no hacen (Sabatini & Wormald, 2004: 80). El cambio de horizontes y objetivos buscados en los movimientos sociales es generado claramente por las circunstancias producidas por el Estado; ya no es la falta de vivienda o los campamentos, sino la segregación clasista que limita a las periferias los desechos que no quieren ser visto en los barrios altos; no es que se busque llegar a ser parte de la elite, sino que traten de forma igualitaria a las personas.

D-. La continuidad con el histórico ‘movimiento de pobladores’.

El movimiento de pobladores de Santiago fue constante en sus movilizaciones y lucha desde que tuviera lugar la primera ‘toma’ en 1948, acelerándose en los años ’60 (Sabatini & Wormald, 2004: 70). Estas ‘tomas’ correspondían a ocupaciones ilegales de terrenos urbanos organizadas por un partido político –Partido Comunista– formando ‘comités sin

casa' que se ocuparían de las 'tomas' y encabezaría la organización para su funcionamiento. El proceso de marginalización latinoamericano que era irreversible, lo que terminaba en la idea de un cuerpo social escindido en dos que atribuía a los marginados un carácter redentor en lo político, pero que también frenaba la evolución del capitalismo (Sabatini & Wormald, 2004: 71), lo que condujo a que la idea de marginalidad quedara impugnada en la pobreza urbana.

Sin embargo, la presencia de un movimiento de pobladores en la actualidad en Santiago que luchara por la carencia de viviendas no ha estado presente. La marginalidad urbana y segregación ha conllevado a centrar el problema en la pobreza y no en la lucha del mítico movimiento de pobladores –vivienda-, siendo foco de políticas sociales y no como condición de posibilidad de un actor político (Angelcos, 2013:2). Aun cuando es consecuencia de algunos factores como la ausencia de un referente político tradicional, la pérdida de relevancia del propio movimiento, trabajo clientelar de los gobiernos de la Concertación y la desafección política, entre otros, han generado una serie diferente de organizaciones sociales que han sido alusiva a las consecuencias de los programas sociales implementados después de la dictadura. Según Angelcos (2013) podemos encontrar que los allegados, arrendatarios y deudores habitacionales han logrado una coordinación y capacidad de acción política dentro de las viviendas. Esta continuidad identitaria e instrumental (demanda por vivienda) es respecto al movimiento tradicional de pobladores, pero también tiene una ruptura por los referentes políticos tradicionales a los cuales subordinaban su destino. Sabatini & Wormald (2004) refiere a que la relación de los pobres con las organizaciones es más bien pragmática y probablemente nunca fue de otra manera. Esto tiene un carácter transitorio e instrumental de las organizaciones que surgen de las movilizaciones reactivas y temáticas que hoy predominan. Ya no existe una postura o valor *per se* que se atribuía a las posturas de izquierda y social-cristianas que dominaban en la década del '60 al '80.

Nicolás Angelcos (2013) da cuenta que el Movimiento de Pobladores en Lucha es claramente la continuidad y ruptura del movimiento tradicional. Este constituye y caracteriza al 'nuevo poblador' como antes hemos descrito en el nuevo universo poblacional. Aun cuando la lucha por la vivienda no sea el principal objetivo de las nuevas organizaciones sociales o movimientos sociales por la ciudad, si se caracteriza una mejor calidad de vida, en donde está incluida la vivienda. Un ejemplo de la continuidad y ruptura es en el terremoto del 27 de febrero del 2010 en donde después de la catástrofe, la Red de Inmuebles Recuperados por Autogestión en Santiago Centro (Red IRA) se instala en la palestra la demanda por la vivienda y el cambio de ocupación de los terrenos y suelos de Santiago (lo que era tradicional del movimiento de pobladores).

El cambio en las formas de movilización popular en las últimas décadas, está dando cuenta de un cambio profundo en la cultura política chilena que subjetiva al poblador. Mientras que antes el ejercicio de la democracia consistía mayoritariamente en exigir del Estado que

se hiciera cargo de los problemas y necesidades con estrategias y populismo, hoy se puede ver la movilización por los derechos individuales y colectivos que serían anteriores al Estado, como los relativos a la calidad de vida.

Estas nuevas organizaciones o movimientos sociales que no están caracterizados por una clase o por un partido político, despliegan sus acciones en el micro-espacio, correspondiéndose horizontalmente, apoderándose de ellos mismos como sujetos y subjetivándose, para así luchar y poder enseñar a los demás como encaminar y lograr acciones y decisiones que respeten sus intereses y tomen en cuenta sus propios puntos de vistas. Luchan por un derecho a la ciudad, por un derecho a la vivienda; más que pobladores, que estigmatiza a muchos, son ciudadanos, de distintos grupos y distintas organizaciones de Santiago.

E-. La lucha por la vivienda.

El cambio en el universo poblacional de horizontes y objetivos que eran específicos durante el periodo dictatorial, no se consolidan en la llamada 'lucha por la vivienda'; pareciera así que ha evolucionado desde la lucha por una casa propia a la lucha por una calidad del entorno, flexibilidad de las unidades de vivienda, localización, convivencia, entre otros. La fragmentación de la identidad del antiguo poblador al nuevo poblador fue inevitable tras veinte años de una política 'exitosa' de financiamiento de vivienda social, pero los efectos urbanos como la segregación y fragmentación y los efectos sociales en las personas como hacinamiento e inseguridad, se han convertido en nuevos problemas de los habitantes de los conjuntos habitacionales creados por el Estado y que los moviliza por una calidad de vida.

La vuelta a la democracia en 1990 no significó, como muchos creían, una multiplicación de las 'tomas' y luchas que caracterizó la época de dictadura militar. El déficit de vivienda había crecido durante esta época y el cambio presidencial preocupaba política y socialmente a las futuras acciones colectivas. La movilizaciones y la motivación para participar por un espacio en la ciudad y una propiedad –vivienda- era clave para aquello, es por eso que constituía un medio concreto para acceder a la propiedad de la vivienda, por lo que numerosas familias pobres se integraban a luchar (Sabatini & Wormald, 2004: 72). Sin la motivación de conseguir y tener una propia vivienda –la cual no era concebida a través del estado- la lucha acababa.

El cambio en las formas de movilización vinieron de la mano con las características de la fase neoliberal del patrón de poder global, que produjo la aparición de nuevos actores periféricos y una rebeldía en la constitución de las ciudades (Renna, 2010: 5). La fragmentación de la identidad del 'ser poblador' como he descrito antes, tuvo como consecuencias definir para qué o contra qué va la lucha de los pobladores (Mathivet & Pulgar, 2014: 1). Una de las causas de la pérdida de identidad puede explicarse por la política habitacional que empezó durante la dictadura y que fue reforzada en los gobiernos

de la Concertación, erradicando asentamientos –campamentos- y tomas de terrenos; el traslado de las personas a viviendas de baja calidad y de pocos metros cuadrados, generó una pérdida de vínculos sociales en el micro-espacio que conformaban en los campamentos y se habían reforzado por la lucha y movilizaciones.

En 1999 fue la última toma en Peñalolén aun cuando llevaban diez años del ‘éxito’ de la política habitacional (Mathivet & Pulgar, 2014: 2). La tradición de la lucha por un lugar en la ciudad y una vivienda digna siguió viva en los pobladores aun después de la última toma; organizaciones como Lucha y Vivienda se reorganizaban para reivindicar sus aspiraciones a una vivienda digna. A partir de esta organización, surge el MPL –Movimiento de Pobladores en Lucha- en 2006, con un nuevo nombre, pero con los mismos objetivo de lucha, recuperando el espacio y el papel activo de los pobladores en la participación política-social de la ciudad. Aravena & Sandoval (2005) afirman que para estos ‘nuevos pobres’ el problema de la vivienda ya no es lo central en sus movilizaciones, pero sin embargo, el hábitat inadecuado, la pobreza y exclusión social continua siendo parte de la vida cotidiana de los pobladores en Santiago que habitan los territorios generados por una intervención estatal, llamados vivienda social.

Estos nuevos pobladores tienen una producción social de hábitat, tienen conciencia de lo que necesitan, del panorama económico y político, y de generar una crítica al Estado. La lucha por la vivienda digna también es una lucha por el sentimiento de identidad y pertenencia al barrio y a la población, de sentirse parte de la ciudad (Mathivet & Pulgar, 2014: 5) y no un marginal. Esta nueva subjetividad que envuelve el universo poblacional responde a la fragmentación de la identidad y el cambio de horizontes y panoramas por los cuales los nuevos pobladores luchan, pero siempre tienen el objetivo de alcanzar el derecho a la ciudad.

La lucha por la vivienda no solo acarrea una casa propia, sino también una calidad de vida igual a la que todos tienen en la ciudad, por lo que hay una conciencia de derechos básicos en las situaciones originales de un ciudadano. Es por eso el problema de la vivienda pasa de las familias ‘sin techo’ a las familias ‘con techo’.

III-. Nuevas concepciones de la política.

A-. El cambio de gobierno con la llegada a la democracia: política de financiamiento.

La toma de terrenos, ocupación ilegal, campamentos, autoconstrucción de viviendas, entre otras acciones, son distintas maneras de responder a las carencias de las soluciones habitacionales entregadas por el Estado y poder producir un propio derecho a la ciudad.

Actualmente, los programas habitacionales del gobierno, gestionan y coordinan a los vecinos para postular colectivamente a los beneficios de los proyectos y generar su propia gestión. Sin embargo, pocas veces se reconoce que los propios habitantes han participado en la construcción de un gran porcentaje de la ciudad y que las urbanizaciones y las viviendas construidas por esa vía han sido el germen para la consolidación de los barrios (Castillo, 2010: 31).

En el tiempo del gobierno militar existió una política de erradicación de campamentos, en que muchos de los que se ubican en comunas del oriente de la capital o en sectores acomodados, se trasladan a comunas periféricas, generalmente al sur de la ciudad de Santiago (Castillo, 2010: 47). Lo anterior claramente da cuenta de la segregación y estratificación clasista de los suelos y de las personas que habitaban la ciudad: '(...) una de las razones políticas, si se quiere decir, era sacar toda la pobreza de la comunidad de Las Condes (Luis Vera, presidente Junta de Vecinos Alborada, 2008; en Castillo, 2010: 47).

El gobierno durante la vuelta democracia de Patricio Aylwin (1990-1994) apuesta a impulsar un proceso que contempla una primera y una segunda etapa de la vivienda, más los aportes de los pobladores. Lo anterior es la 'vivienda progresiva' en la cual no entraremos en detalles, pero como afirma María José Castillo (2010) las segundas etapas casi no se implementan y el programa tiene débiles resultados. Los primeros gobiernos de la Concertación siguen la misma política de financiamiento implementada por el gobierno militar, basada en la triada subsidio/ ahorro previo/ crédito hipotecario, en donde se obtiene la vivienda 'que le toque' (Castillo, 2010: 52). Aun cuando el Estado proporcionara a una parte de los ciudadanos viviendas, estos han construido sus propias soluciones por las deficiencias que presentan, en donde la autoconstrucción y las ampliaciones son maneras de responder y producir el hábitat popular.

En consecuencia, se privilegia la cantidad de 'soluciones habitacionales' en desmedro de la calidad del territorio que se construye, y la escasez de suelo es el principal factor que hace colapsar el modelo de gestión promovido desde los años '80. Gracias a la construcción masiva de vivienda seriadas entre 1990-2000 traslada el problema de cuantitativo a cualitativo, en donde la segregación socio-espacial de los pobres, las viviendas de mala calidad, diseño inadecuado a las necesidades, inseguridad, deterioro de salud mental, entre otros, son consecuencias de los efectos nocivos de la política de financiamiento que perpetúan la pobreza. Bajo estas consecuencias, se demuestran nuevas demandas y acciones bajo diferentes tomas – Esperanza Andina de Peñalolén- para una mejor ubicación de la vivienda, ya que no es solo una casa, sino una casa *aquí y ahora*. Esta toma al igual que la de 1999 'de Nasur', son toma de terrenos en suelos de precios elevados, importantes para las inmobiliarias y para una reivindicación al derecho de radicarse en el terreno de su misma comuna.

Lo anterior va dando paso a diferentes cambios en las políticas de financiamiento que logren acaparar todas las necesidades de las diferentes familias en busca de la vivienda. En estas se encuentra la transformación del Fondo Solidario de Vivienda –correspondiente a la nueva política del 2001-, el subsidio diferenciado de localización, para las comunas donde los terrenos son más caro –un complemento al subsidio FSV, ajustado en el gobierno de Bachelet, 2006-. Estos profundizan los ajustes planteados por las familias, aumentando la superficie de la vivienda, controlando la calidad de edificación y poder acceder a un financiamiento de terrenos bien localizados, ayudando a la segregación de los ciudadanos, integrando socialmente en la agenda pública el tema de la vivienda.

La política de financiamiento y los programas de vivienda y de barrio no consiguen consagrarse completamente, ya que la política habitacional aun considera a la vivienda y al barrio como dos elementos autónomos (Castillo, 2010: 57). El problema se genera en el modo que perciben la vivienda como una ‘unidad habitacional’ y no entienden que el valor asignado a la vivienda este estrechamente relacionado con su localización y el entorno donde se inserta, generando problemas cualitativos a las familias, reconfigurando las identidades individualista de los sujetos por una lucha privada por la vivienda. Carolina Besoain (2014) da cuenta que los proceso de subjetivación se hallan en estrecha relación con la entrada chilena a la fase acumulación flexible puesta en marcha desde la dictadura militar. La ausencia del Estado como interlocutor, figura o voz a la cual dirigirse, pedir, reclamar o denunciar, parece expresar la obturación de la voz de derecho y con ello, facilita el repliegue de algunos ciudadanos hacia el mundo privado abandonando el espacio de lo público, pero también construye la acción de organizaciones o movimientos sociales en la lucha de los derechos no otorgados.

B-. La política de vida: nociones de la política popular.

Es evidente que los movimientos sociales populares han sido y son portadores de discursos y practicas sobre la forma de hacer política que pocas veces han coincidido con el valor democrático que se tiene como régimen político actual. Según Tomás Moulain (2002), la experiencia chilena con relación a la democracia es la historia de una dualidad: la democracia como gobernabilidad desde las elites y la democracia como proceso de democratización siempre incompleto y más como el ‘deseo de otro Chile’, desde el pueblo (Garcés, 2004: 17).

El proceso de la dictadura militar reconfiguro todos los aspectos sociales, políticos y económicos de Chile, lo que llevo a los movimientos sociales a replantearse luego de la vuelta a la democracia el contra quién y por qué luchaban. Frente a lo anterior, se puede dilucidar tres problemas que resultan claves para el estudio y comprensión de los movimientos sociales populares y su constitución de la política popular: 1) su propia constitución, formas de organización, demanda y estrategias predominante, 2) los modos en que los movimientos se han relacionado con la política, sus propias nociones de esta, así

como sus aportes y 3) hay que dar cuenta de los cambios que se produjeron en el contexto de dictadura, los grupos base se reorganizaron hasta desestabilizar el régimen militar y poder poner condiciones para el retorno de la democracia. Claramente, los movimientos sociales nacidos del campo popular y de las clases medias han ido en la búsqueda de la representatividad política en el Estado que los escuche como un ente más de la sociedad; sin embargo, hay que hacer referencia a la diversidad de los movimientos más transversales o pluriclasistas entre los cuales está el movimiento estudiantil, movimientos juveniles, homosexuales y también el más extendido y multifacético movimiento de mujeres (Garcés, 2004: 17).

Con la continuidad del modelo neoliberal en Chile excluyendo a los movimientos sociales, Garcés (2004) afirma que esta transición elitista dejó de lado la participación ciudadana y popular, estructurando las nociones dominantes de democracia entre los partidos políticos, una gobernabilidad entre los agentes políticos chilenos. En la actualidad, tal como hemos hecho referencia a Tomás Moulain, la dualidad es mucho más acentuada; la democracia opera como sistema político elitista y empresarial, con débiles movimientos sociales capaces de emprender tareas democratizadoras (Garcés, 2004: 29).

Lo anterior ha generado nuevas orientaciones movimientales que buscan crear instancias de coordinación y una red de organizaciones poblacionales, con diferentes colectivas y temáticas de solidaridad social. Los diversos grados de autonomía predominan en conjunto a un tipo de relación instrumental con el Estado. La dinámica de base representa un campo importante de complejo desarrollo político que reproducen formas tradicionales y que en los movimientos populares dan paso a una asociación horizontal de redes auto-gestionadas como el resultado de la acción del Estado. Esta propia política popular horizontal y de los pobladores siguen representando la principal potencia democratizadora de la sociedad chilena que no es tomada en cuenta en el sistema de gobernabilidad del Estado central. Para los nuevos movimientos sociales, el desafío mayor probablemente sea valorar sus propias experiencias como prácticas de transformación social, y a partir de ellas encontrar los modos de articulación que les permitan constituirse en sujetos colectivos de cambio y democratización de la sociedad (Garcés, 2004: 31). Hay que concretar la 'política popular' para que reconozcan el aporte al desarrollo social de la democracia desde el pueblo y los diversos desafíos que enfrenta el sistema frente a la masificación de movimientos sociales en búsqueda de nuevos horizontes político que los admitan y los incluya como actores y sujetos sociales de derechos.

C-. Las acciones colectivas como prácticas políticas.

La toma de terreno y más tarde la consolidación definitiva de un barrio, ha sido el resultado de una lucha organizada y acciones colectivas donde los pobladores han podido demostrar que el único camino posible para sus reivindicaciones era la movilización y participación social de lo que ellos consideraban que el Estado y las políticas de financiamiento no

hacían. ‘El conjunto de pobladores (...) ha impulsado una acción fundada en la profunda necesidad de modificar su situación de pobreza, dando respuesta a los problemas reales y cotidianos (...) sin decirlo explícitamente fueron configurando una práctica política que a lo menos dejó sentada bases importantes para el desarrollo de procesos de participación sustantiva’ (Figueroa, 2003: 586).

Desde el año 2000 se observa en Santiago de Chile una proliferación de reacciones colectivas que se oponen a intervenciones urbanas que, trastocan arbitrariamente sus entornos locales de la vida (Parranguez, 2012: 223). Muchas de las organizaciones estudiadas por Leslie Parranguez, dan cuenta que las acciones son reacciones en defensa o rechazo a diferentes procesos de viviendas y urbanismo, en torno a la localización en la ciudad, como bien hemos visto en el conflicto de una lucha por la vivienda.

Yanny Figueroa (2003) en el estudio de los pobladores del Comité de Allegados Esperanza Andina, da cuenta que la búsqueda de una vida digna acorde a sus condiciones, funda en la experiencia de los sujetos de organizaciones o movimientos sociales una perspectiva de derechos que no pueden pasar a llevar a través del Estado. Reafirman y concientizan a las personas de ejercer sus derechos básicos y solo se lograra a través de construir un movimiento social fuerte con nuevos valores, que les permita incorporarse a las discusiones de políticas de financiamiento para una activa participación de ellos como sociedad. Este rol protagónico asumido como colectivo, los hace situarse frente al Estado desde una posición más propositiva, elaborando una estrategia de negociación política con los más diversos actores y sectores de la vida pública nacional (Figueroa, 2003: 579).

La participación activa, racional y responsable de los pobladores o participantes de movimientos sociales, ha generado un cambio progresivo en el desarrollo de medidas que se pueden tomar para asumir la importancia de incorporar todas las voces en diferentes propuestas del estado. Estas prácticas políticas de negociación con el Estado y diferentes agentes civiles, dan cuenta de la capacidad de producción de hábitat y el empoderamiento de la realidad y la vida cotidiana que están teniendo actualmente los ciudadanos de Santiago de Chile. Desde tomas, movilizaciones, marchas, foros, entre otras acciones, van concientizando a la ciudadanía de subjetivarse y hacer valer sus prácticas participativas y de trabajo en la socialización con las políticas elitistas del Estado, generando un sentimiento de identificación vinculado a la participación generada. Los diferentes objetivos de las organizaciones sociales van de la mano a una propia practica de política horizontal y popular que genere una real democracia en cuanto a los problemas de las personas, que van más allá de un bono o el ahorro a una casa de espacios reducidos.

Bibliografía.

Angelcos, Nicolás (2013) Casonas ocupadas y lucha por la vivienda en el casco histórico de Santiago de Chile. Continuidad y ruptura del movimiento de pobladores. RITA, n°6: febrero 2013, (en línea), puesto en línea el 28 de febrero de 2013.

Aravena Escobar, Fabiola (2011). Acciones colectivas y transformación del conflicto en Santiago: El caso de Andha Chile. Tesis para optar a Título de Sociólogo y grado de Licenciado en Sociología, Biblioteca Digital de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, Chile.

Aravena, Susana & Sandoval, Alejandra (2005). Capítulo 5: El diagnóstico de los pobladores 'con techo'. En *Los con Techo: un desafío para la política de vivienda social*, Edutado por Alfredo Rodríguez y Ana Sugranyes. Ediciones SUR.

Besoain, Carolina & Cornejo, Marcela (2014). Vivienda Social y Subjetivación Urbana en Santiago de Chile: Espacio Privado, Repliegue Presentista y Añoranza.

Castillo Couve, María José (2010). Producción y gestión habitacional de los pobladores. Participación desde abajo en la construcción de vivienda y barrio en Chile. Artículo de Portafolio.org en Cuadernos Electrónicos N°6, pág. 51-55, 57-69.

De Sousa, Boaventura (2001). Los nuevos movimientos sociales. Clacso.

Figuroa, Yanny (2003). Campamento Esperanza Andina. Ampliando la Ciudadanía, promoviendo la participación: 30 innovaciones locales. Programa Ciudadanía y Gestión Local. Un estímulo a la Innovación, Instituto de Asuntos Públicos & Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza.

Garcés, Mario (2004). Los movimientos sociales populares en el siglo XX: Balance y perspectivas. CEME- centro de Estudios Miguel Enríquez- ArchivoChile, n°43, Primavera 2004. Pág 13-33.

Godoy Vargas, Daniela & Matus Azocar, Katherine (2011). Autonomía y articulación social de las nuevas organizaciones sociales de la ciudad de Santiago. Tesis para optar al grado de Licenciado en Trabajo Social y para optar al título de Asistente Social, Biblioteca Digital Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Márquez, Francisca (2008). Procesos de urbanización de la pobreza y nuevas formas de exclusión social, los retos de las políticas sociales de las ciudades latinoamericanas del siglo XXI, Parte III: Resistencia y sumisión en sociedades urbanas y desiguales: poblaciones, villas y barrios populares en Chile, pág 347-370.

Mathivet, Charlotte & Pulgar, Claudio (2014). El Movimiento de Pobladores en Lucha (Santiago, Chile). Artículo de la publicación del HIC 'Ciudades para Todos: Por el Derecho

a la Ciudad, Propuestas y Experiencias', Sugranyes A. y Mathivet C., HIC, Santiago, 2010, página 211.

Moulian, Tomás (2002). 'El deseo de otro Chile'. En Tomás Moulian (coordinador), *Construir el futuro*. Santiag. LOM Ediciones: 137-175.

Parraguez, Leslie (2012). La reconstrucción de movimiento social en barrios críticos: El caso de la 'coordinadora de pobladores José María Caro' de Santiago de Chile, *Revista Invi*: vol. n°27 p.217-246.

Renna G, Henry. La situación actual de los movimientos sociales urbanos: autonomía, pluralidad y territorialización múltiple. *Revista Electrónica Diseño Urbano y Paisaje (DU&P) Volumen VII N°20*.

Rodriguez, A& Sugranyes, A. (2004). El problema de vivienda de los 'con techo', *EURE*, 30 (91), 53-65.

Sabatini, Francisco & Wormald, Guillermo (2004). La guerra de la basura de Santiago: desde el derecho a la vivienda al derecho a la ciudad. *Revista Eure* (vol.XXX, N°91), pág.67-86, Santiago de Chile.

Salas, Verónica (1999). Rasgos históricos del movimiento de pobladores en los últimos 30 años. Taller de Acción cultural, ArchivoChile.

Sandoval, Mario (1999). Quienes son, que piensan y que hacen los pobladores chilenos a fin de siglo. Última Década, núm.11, septiembre, 1999, Centro de Estudios Sociales, Cidpa, Chile.